Contenido

[ANTECEDENTES 1](#_Toc193383301)

[DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1](#_Toc193383302)

[a) Solicitud de información 1](#_Toc193383303)

[b) Turno de la solicitud de información 2](#_Toc193383304)

[c) Respuesta del Sujeto Obligado 2](#_Toc193383305)

[DEL RECURSO DE REVISIÓN 4](#_Toc193383306)

[a) Interposición del Recurso de Revisión 4](#_Toc193383307)

[b) Turno del Recurso de Revisión 5](#_Toc193383308)

[c) Admisión del Recurso de Revisión 5](#_Toc193383309)

[d) Informe Justificado del Sujeto Obligado 5](#_Toc193383310)

[e) Manifestaciones de la Parte Recurrente 7](#_Toc193383311)

[f) Cierre de instrucción 7](#_Toc193383312)

[CONSIDERANDOS 7](#_Toc193383313)

[PRIMERO. Procedibilidad 7](#_Toc193383314)

[a) Competencia del Instituto 7](#_Toc193383315)

[b) Legitimidad de la parte recurrente 8](#_Toc193383316)

[c) Plazo para interponer el recurso 8](#_Toc193383317)

[d) Causal de Procedencia 8](#_Toc193383318)

[e) Requisitos formales para la interposición del recurso 8](#_Toc193383319)

[SEGUNDO. Estudio de Fondo 9](#_Toc193383320)

[a) Mandato de transparencia y responsabilidad del Sujeto Obligado 9](#_Toc193383321)

[b) Controversia a resolver 11](#_Toc193383322)

[c) Estudio de la controversia 13](#_Toc193383323)

[d) Conclusión 35](#_Toc193383324)

[RESUELVE 36](#_Toc193383325)

Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, del **veinte de marzo de dos mil veinticinco.**

**VISTO** el expediente formado con motivo del Recurso de Revisión **01417/INFOEM/IP/RR/2025** interpuesto por **XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX**, a quien en lo subsecuente se le denominará **LA PARTE RECURRENTE**, en contra de la respuesta emitida por el **Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez**, en adelante **EL SUJETO OBLIGADO**, se emite la presente Resolución con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

# ANTECEDENTES

## DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

### a) Solicitud de información

El **veintidós de enero de dos mil veinticinco,** **LA PARTE RECURRENTE** presentó una solicitud de acceso a la información pública ante el **SUJETO OBLIGADO**, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). Dicha solicitud quedó registrada con el número de folio **00105/NAUCALPA/IP/2025** y en ella se requirió la siguiente información:

“Oficios firmados por el C. Carlos Gabriel Villasana Beltrán, del 1 al 15 de enero de 2025” Sic

**Modalidad de entrega**: a través del***SAIMEX****.*

### b) Turno de la solicitud de información

En cumplimiento al artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **veintitrés de enero de dos mil veinticinco,** la Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** turnó la solicitud de información al servidor público habilitado que estimó pertinente.

### c) Respuesta del Sujeto Obligado

El **trece de febrero de dos mil veinticinco,** el Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** notificó a través del **SAIMEX** la siguiente respuesta:

“Folio de la solicitud: 00105/NAUCALPA/IP/2025

En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:

En atención a la solicitud requerida se adjunta al presente la respuesta emitida por la Consejería Jurídica

ATENTAMENTE

Lic. Daniel Taboada Elías” (sic)

Asimismo, **EL SUJETO OBLIGADO** adjuntó a su respuesta el archivo electrónico que se describe:

* ***00105-NAUCALPA-IP-2025 - COM.pdf***

Archivo constante de 13 páginas, en las que se aprecia lo siguiente:

Páginas 1 -2. El Oficio número CJ/SC/DCC/1030/2025 de fecha 11 de febrero de 2025, dirigido al solicitante, suscrito por el Titular de la Consejería Jurídica, en el que le indica de manera medular lo siguiente:

“Respecto al contenido de su solicitud, le manifiesto que, en esta Consejería Jurídica, se realizó la búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable, llevada a cabo en los archivos físicos y electrónicos que obran en la misma, por lo que se encontró que el número total de oficios generados del 1° al 15 de enero de 2025 fue de 193, de los cuales, se observó que 184 corresponden a la tramitación de juicios de diversas materias en los que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez y sus Dependencias Municipales de la administración centralizada, son parte, incluyendo los de investigaciones que realiza el Ministerio Público por delitos cometidos. Por ende, esta Consejería Jurídica considera que se colocan en algunos criterios contenidos en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y que, por tanto, deben ser reservados.

Por lo anterior, …se solicitó la clasificación de información como reservada, correspondiente a los oficios recibidos y emitidos, física y/o digitalmente…relacionado con los medios de defensa y juicios en los que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez y las dependencias municipales de la administración centralizada sean parte.

En fecha cinco de febrero de 2025, en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, emitió el siguiente Acuerdo:

|  |
| --- |
| *Acuerdo: CT/NAU/ACTA-ORD-003/2025/036*  *Tercera Sesión Ordinaria 2025* |
| ***“PRIMERO.-*** *En términos de los previsto en …. Se confirma la clasificación de la información en su modalidad de reservada CORRESPONDIENTE A LOS OFICIOS RECIBIDOS Y EMITIDOS, FÍSICA Y/O DIGITALMENTE, POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA …RELACIONADO CON LOS MEDIOS DE DEFENSA Y JUICIOS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA SEAN PARTE…” Sic.* |

De igual forma se advierten diversos oficios suscritos por el Titular de la Consejería, correspondientes a los números de oficios siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Página** | **Oficio** | **Fecha** | **Observaciones** |
| 3 | CJ/SC/DCC/025/2025 | 07/enero/2025 | - |
| 4 | CJ/DPA/SCC/044/2025 | 08/enero/2025 | Contiene el nombre del actor del Juicio de Amparo. |
| 5 | CJ/CA/054/2025 | 09/enero/2025 | - |
| 6 | CJ/086/2025 | 02/enero/2025 | - |
| 7 | CJ/107/2025 | 10/enero/2025 | - |
| 8 | CJ/110/2025 | 10/enero/2025 | - |
| 9 | CJ/115/2025 | 13/enero/2025 | - |
| 10 | CJ/142/2025 | 14/enero/2025 | - |
| 11 | CJ/166/2025 | 14/enero/2025 | - |
| 12 - 13 | CJ/SC/DCC/122/2025 | 13/enero/2025 | - |

## DEL RECURSO DE REVISIÓN

### a) Interposición del Recurso de Revisión

El **catorce de febrero de dos mil veinticinco,** **LA PARTE RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, mismo que fue registrado en el **SAIMEX** con el número de expediente **01417/INFOEM/IP/RR/2025**, y en el cual manifestó lo siguiente:

**ACTO IMPUGNADO**

“El Sujeto Obligado únicamente me entrega un oficio por el que se me informa que, en diversa sesión del comité de transparencia, sin que me adjunte la resolución a través de la cual el órgano especializado en la materia de ese sujeto obligado después de un análisis de ponderación y en estricto cumplimiento a lo señalado en las leyes que regulan a reserva, justifiquen y aprueban lo señalado por la Dirección competente.” Sic

**RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**

“El Sujeto Obligado únicamente me entrega un oficio por el que se me informa que, en diversa sesión del comité de transparencia, sin que me adjunte la resolución a través de la cual el órgano especializado en la materia de ese sujeto obligado después de un análisis de ponderación y en estricto cumplimiento a lo señalado en las leyes que regulan a reserva, justifiquen y aprueban lo señalado por la Dirección competente.” Sic

### b) Turno del Recurso de Revisión

Con fundamento en el artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **catorce de febrero de dos mil veinticinco,** se turnó el recurso de revisión a través del SAIMEX a la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez**, a efecto de decretar su admisión o desechamiento.

### c) Admisión del Recurso de Revisión

El **dieciocho de febrero de dos mil veinticinco,** se acordó la admisión a trámite del Recurso de Revisión y se integró el expediente respectivo, mismo que se puso a disposición de las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, conforme a lo dispuesto por el artículo 185, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### d) Informe Justificado del Sujeto Obligado

El **veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco EL SUJETO OBLIGADO** rindió su informe justificado a través del **SAIMEX**, que contienen lo siguiente:

* ***CJ\_SC\_DCC\_1435\_2025.pdf***

Archivo constante de 3 páginas, en las que se aprecia el Oficio número CJ/SC/DCC/1435/2025 de fecha 24 de febrero de 2025, dirigido al Coordinador de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, suscrito por el Titular de la Consejería Jurídica, mediante el cual rinde el informe justificado correspondiente de manera medular en los términos siguientes:

“VI. No obstante lo anterior, y a fin de respetar el Derecho Humano de Acceso a la Información Pública del recurrente, también acompaño al presente informe justificado, en archivo electrónico, extracto del acta de Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez en su parte conducente, en la que el recurrente podrá apreciar las razones y motivos lógico jurídicos que fueron expuestos por esta Consejería Jurídica, y considerados en la determinación del Acuerdo del Comité de Transparencia de este Municipio, identificado con la nomenclatura CT/NAU/ACTA-ORD-003/2025/036, con lo cual queda satisfecho el motivo de inconformidad del promovente del recurso.

* ***ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA - CT-NAU-ACTA-ORD-003-2025-04.pdf***

Archivo constante de 10 páginas, en las que se aprecia las páginas de la 12 a la 21 del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, para analizar y resolver la solicitud de clasificar en su modalidad de reserva a fin de dar atención a la solicitud de información número 00105/NAUCALPA/IP/2025, así como se vislumbra el Acuerdo: CT/NAU/ACTA-ORD-003/2025/036.

* ***00105-NAUCALPA-IP-2025 - COM.pdf***

Archivo constante de 13 páginas, correspondiente a la respuesta proporcionada por el Titular de la Consejería Jurídica previamente descrito en el apartado de respuesta.

Esta información fue puesta a la vista de **LA PARTE RECURRENTE** el **cinco de marzo de dos mil veinticinco,** para que, en un plazo de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, de conformidad con lo establecido en el artículo 185, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con excepción del archivo denominado ***00105-NAUCALPA-IP-2025 - COM.pdf*** por contener datos personales susceptibles de clasificarse en términos de la Ley de Transparencia Local.

### e) Manifestaciones de la Parte Recurrente

**LA PARTE RECURRENTE** no realizó manifestación alguna dentro del término legalmente concedido para tal efecto, ni presentó pruebas o alegatos.

### f) Cierre de instrucción

Al no existir diligencias pendientes por desahogar, el **diecinueve de marzo de dos mil veinticinco,** la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez** acordó el cierre de instrucción y la remisión del expediente a efecto de ser resuelto, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 fracciones VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Dicho acuerdo fue notificado a las partes el mismo día a través del SAIMEX.

# CONSIDERANDOS

## PRIMERO. Procedibilidad

### a) Competencia del Instituto

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; ordinal 2, fracción II, 13, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

### b) Legitimidad de la parte recurrente

El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, ya que se presentó por la misma persona que formuló la solicitud de acceso a la Información Pública,debido a que los datos de acceso **SAIMEX** son personales e irrepetibles.

### c) Plazo para interponer el recurso

**EL SUJETO OBLIGADO** notificó la respuesta a la solicitud de acceso a la Información Pública el **trece de febrero de dos mil veinticinco,** y el recurso que nos ocupa se tuvo por presentado el **catorce de febrero de dos mil veinticinco**; por lo tanto, éste se encuentra dentro del margen temporal previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### d) Causal de Procedencia

Resulta procedente la interposición del recurso de revisión, ya que se actualiza la causal de procedencia señalada en el artículo 179, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### e) Requisitos formales para la interposición del recurso

**LA PARTE RECURRENTE** acreditó todos y cada uno de los elementos formales exigidos por el artículo 180 de la misma normatividad.

## SEGUNDO. Estudio de Fondo

### a) Mandato de transparencia y responsabilidad del Sujeto Obligado

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México:

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

***“Artículo 6.***

*(…)*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****.* ***Para el ejercicio del derecho de acceso a la información****, la Federación y* ***las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

***I. Toda la información en posesión de cualquier******autoridad****, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y* ***municipal****,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

***“Artículo 5****.-*

*(…)*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho****.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

***Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes****:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los*** *Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y* ***municipales****, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.* ***Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

Asimismo, el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios indica que la solicitud es la garantía primaria del Derecho de Acceso a la Información, además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez, gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares.*

Por su parte, el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios refiere que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad.

Esto es, que los Sujetos Obligados deben atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les sean realizadas, y proporcionar la información pública que obre en su poder, conforme al estado en que se encuentre, sin que sea necesario procesar la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma, teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular o practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados sólo se concretarán a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentra, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

En esa tesitura, el artículo 24 último párrafo de la Ley de la Materia dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública, siempre y cuando no se trate de información reservada o confidencial.

### b) Controversia a resolver

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada, resulta conveniente precisar que, una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que **LA PARTE RECURRENTE** solicitó los oficios firmados por el C. Carlos Gabriel Villasana Beltrán, del 1 al 15 de enero de 2025.

En respuesta, **EL SUJETO OBLIGADO** se pronunció a través del titular de la Consejería Jurídica quien manifestó que, se realizó la búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable, llevada a cabo en los archivos físicos y electrónicos que obran en la misma, por lo que se encontró que el número total de oficios generados del 1° al 15 de enero de 2025 fue de 193, de los cuales, se observó que 184 corresponden a la tramitación de juicios de diversas materias en los que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez y sus Dependencias Municipales de la administración centralizada, son parte, incluyendo los de investigaciones que realiza el Ministerio Público por delitos cometidos. Por ende, esta Consejería Jurídica considera que se colocan en algunos criterios contenidos en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y que, por tanto, deben ser reservados. De igual manera le informó que en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, se emitió el Acuerdo: CT/NAU/ACTA-ORD-003/2025/036 en el que se confirmó la clasificación de la información en su modalidad de reservada correspondiente a los oficios recibidos y emitidos, física y/o digitalmente, por la Consejería Jurídica relacionado con los medios de defensa y juicios en los que el ayuntamiento de Naucalpan de Juárez y las dependencias municipales de la administración centralizada sean parte. De igual manera le proporcionó de manera íntegra los oficios con número de folio siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Página** | **Oficio** | **Fecha** |
| 3 | CJ/SC/DCC/025/2025 | 07/enero/2025 |
| 4 | CJ/DPA/SCC/044/2025 | 08/enero/2025 |
| 5 | CJ/CA/054/2025 | 09/enero/2025 |
| 6 | CJ/086/2025 | 02/enero/2025 |
| 7 | CJ/107/2025 | 10/enero/2025 |
| 8 | CJ/110/2025 | 10/enero/2025 |
| 9 | CJ/115/2025 | 13/enero/2025 |
| 10 | CJ/142/2025 | 14/enero/2025 |
| 11 | CJ/166/2025 | 14/enero/2025 |
| 12 - 13 | CJ/SC/DCC/122/2025 | 13/enero/2025 |

Es así que derivado de la respuesta emitida por **EL SUJETO OBLIGADO** el ahora **PARTE RECURRENTE** se inconformó manifestando que el Sujeto Obligado le entrega un oficio en el que le informa que, en diversa sesión del comité de transparencia, se clasificó la información, sin que se le adjunte dicha resolución.

Por lo que, en la etapa de manifestaciones, **EL SUJETO OBLIGADO** rindió su Informe Justificado, pronunciándose respecto de los motivos de inconformidad, adjuntando de nueva cuenta los oficios proporcionados en respuesta, así como en archivo electrónico, el extracto del acta de Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez en la que se sustenta la clasificación de la información como reservada, mediante el acuerdo identificado con la nomenclatura CT/NAU/ACTA-ORD-003/2025/036 de los oficios referidos en dicho documento.

Por su parte el ahora **RECURRENTE** no realizó manifestación alguna en dicha etapa.

Bajo las premisas anteriores, se concluye que la controversia a dilucidar en el presente medio de impugnación será verificar la procedencia de la clasificación de la información referida por **EL SUJETO OBLIGADO** para satisfacer el derecho de acceso a la información pública de **LA PARTE RECURRENTE.**

### c) Estudio de la controversia

Expuesto lo anterior, como primer punto, es toral señalar que este Órgano Garante del análisis a la inconformidad presentada por **LA PARTE RECURRENTE** advierte que existe un consentimiento tácito **respecto de los oficios entregados en respuesta por EL SUJETO OBLIGADO** en razón de que al presentar el medio de impugnación no manifestó inconformidad alguna respecto de la información proporcionada sino únicamente respecto de la clasificación de la información invocada por el ente recurrido.

En ese tenor, por consiguiente, la parte de la respuesta que no fue impugnada debe declararse **consentida** por **LA PARTE RECURRENTE**; pues por dichos rubros no expresó manifestaciones de inconformidad, por lo que no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado, ya que se infiere un consentimiento tácito de **LA PARTE RECURRENTE** ante la falta de impugnación eficaz.

Por tal circunstancia, en la presente resolución no se hará pronunciamiento sobre las documentales proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO**, por no ser materia de impugnación, al haberse consentido tácitamente, entendiéndose por estos cuando el agravio no se haya promovido en el plazo señalado para el efecto, o como fue en el caso que nos ocupa, la omisión de exposición de motivos de inconformidad mismos que no fueron vertidos en su totalidad dentro del Recurso de Revisión.

Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

“**ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.** Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.” Sic.

Lo anterior es así, debido a que cuando el particularimpugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, y no expresó razón o motivo de inconformidad en contra de los rubros entregados, dichos rubros deben declararse atendidos, pues se entiende que **EL RECURRENTE** está conforme con la respuesta proporcionada por **EL SUJETO OBLIGADO**, al no contravenir la misma.

Atento a ello, es importante traer a contexto la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

**“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.** Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.” Sic.

Para mayor precisión a lo aquí expuesto, lo anterior guarda relación toda vez que en el caso de que **LA PARTE RECURRENTE** no haya manifestado su inconformidad en contra del acto en su totalidad o en alguna de sus partes, se tendrá por consentido al no haber realizado argumento alguno que formulara un agravio en su contra, por lo que, en la especie, se válida la respuesta respecto de los documentos remitidos en respuesta y se arriba a la conclusión de que estos quedaron firmes. Situación, que se robustece con el Criterio 01/20, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

**“Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis.** Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.” Sic.

Conforme al Criterio establecido y a todo lo antes expuesto, en conclusión este Órgano Garante no realizará el análisis de los documentos remitidos mediante respuesta por parte del **SUJETO OBLIGADO** que no fueron impugnadas por **LA PARTE RECURRENTE**; esto es, por lo que corresponde a los oficios entregados en respuesta, por lo que, en el presente caso, se tiene por consentida dicha información.

Atento a ello, es importante señalar que **LA PARTE RECURRENTE** se duele al presentar el medio de impugnación de que **EL SUJETO OBLIGADO**  “… *entrega un oficio por el que se me informa que, en diversa sesión del comité de transparencia, sin que me adjunte la resolución a través de la cual el órgano especializado en la materia de ese sujeto obligado después de un análisis de ponderación y en estricto cumplimiento a lo señalado en las leyes que regulan a reserva, justifiquen y aprueban lo señalado por la Dirección competente.*” Sic

Por lo que, es de destacar que, cuando se clasifica información no se puede solo simplemente manifestar que cierta información es reservada o confidencial ya que la clasificación de la información no se da por el simple mandato de la Ley, sino que **ante la negativa de acceso a la información, EL SUJETO OBLIGADO deberá demostrar que se encuentra en alguna de las excepciones establecidas en la normatividad aplicable**, tal y como lo dispone el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En ese sentido, según Trujillo, Humberto (2019), en el “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (p. 201), **la negativa de acceso a la información** ocurre cuanto de manera fundada y motivada, una autoridad la niega o la limita, por alguna de las siguientes razones:

* **La inexistencia de la información (p. 171):** Sucede cuando la información solicitada no se encuentra en los archivos públicos o clasificados de los entes sujetos a las Leyes de Transparencia.
* **La incompetencia del Sujeto Obligado (p. 171):** Ocurre cuando el Sujeto Obligado carece de atribuciones para poseer la información peticionada.
* **La clasificación de la información (p. 70): Es el proceso o conjunto de acciones que realizan los sujetos obligados para establecer que determinada información se encuentra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad establecidos en la legislación en materia de transparencia.**

**Énfasis añadido.**

Atento a lo anterior, es importante mencionar que aunque **EL SUJETO OBLIGADO**, tiene la obligación de transparentar sus actuaciones, garantizando el derecho humano de acceso a la información pública, lo cierto es que dicho derecho puede ser restringido de manera excepcional por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por la Ley, a través de la clasificación de la información como confidencial o reservada para permitir el acceso, como se desprende del artículo 91 de la Ley de la Materia que es del tenor literal siguiente:

***“Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.”*

En ese contexto, en lo que respecta a la información peticionada por el solicitante le fue puesta una medida de restricción para tener acceso a ella, por parte del **SUJETO OBLIGADO**, sin que le fuera proporcionado de manera primigenia el documento en donde se justifique dicha negativa a la entrega de la información; siendo mediante su informe justificado que **EL SUJETO OBLIGADO** trató de subsanar dicha omisión al remitirle el extracto del acta del Comité de Transparencia, en la que se aprobó la clasificación de la información como reservada.

En ese orden de ideas, y ante la negativa a la entrega de la información requerida por **LA PARTE RECURRENTE,** conviene analizar la reserva de dicha información, siendo necesario traer a contexto lo dispuesto por en los artículos 122, 128 y 130 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se prevé que **la clasificación** es el proceso mediante el cual los sujetos obligados determinan que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. Además, que dichos entes deberán aplicar de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información, por lo que, tendrán que acreditar la procedencia.

Por lo cual, en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, **el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión;** además, deberá motivar la confirmación de dicha situación, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que en el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

Por su parte, según Bonifaz, Leticia (2016), en la “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Comentada” (p. 342), la **clasificación de la información**, ocurre cuando la autoridad niega el acceso a esta, por ser confidencial o reservada, para lo cual, los sujetos obligados, deberán realizar el proceso de clasificación, a la luz de los principios y disposiciones establecidas en las Leyes de Transparencia, fundando y motivando, **de manera adecuada la negativa de información.**

Asimismo, el reservar la información, implica el reconocimiento por parte del **SUJETO OBLIGADO** de que se encuentra dentro de sus archivos, por lo que tiene el carácter de público y sí es susceptible de entregarse, es decir, de transparentarse; empero, advierte que existen causas presentes que impiden la publicidad y/o entrega de la información durante cierto periodo de tiempo.

Siendo pertinente aclarar que, la información que se clasifica bajo la premisa de reservada, no pierde el carácter de pública, sino que se impide su acceso temporalmente del conocimiento público, es decir, que por un tiempo determinado, se conservará y custodiará la información de manera especial, y una vez transcurrido el plazo de custodia, el documento podrá divulgarse.

Por todo lo anterior, la reserva de la información implica una clasificación, la cual debe entenderse como el proceso mediante el cual **EL SUJETO OBLIGADO** determina que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos conforme a las normas aplicables.

En tal virtud, conforme al artículo 49, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los Comités de Transparencia, tienen la atribución de aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información, mientras que, el artículo 128 de la misma Ley, indica que, en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia, deberá confirmar, modificar o revocar la decisión, que para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán de señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al **SUJETO OBLIGADO** a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento; siendo que, además, **EL SUJETO OBLIGADO** debe, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Dicho lo anterior, es necesario definir a la prueba de daño como la responsabilidad de los Sujetos Obligados de demostrar de manera fundada y motivada, que la divulgación de la información lesiona el interés debidamente protegido por la Ley, y que el menoscabo o daño que puede producirse con la publicidad de la información, es mayor que el interés de conocerla, por lo que debe clasificarse como reservada.

De este modo, conforme al artículo 132 en correlación con el numeral 49, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, para clasificar la información se debe de atender a lo dispuesto por la normativa y aplicar, de manera estricta, las excepciones del derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia, debiendo clasificar la información en el momento en que:

1. Se reciba una solicitud de acceso a la información.

2. Se determine mediante resolución de autoridad competente.

3. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.

Situación que se robustece con lo previsto en el artículo 141 de citada Ley, que señala que las causales de reserva previstas, se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño.

Igualmente, la clasificación de la información debe estar sustentada en el Acuerdo de Clasificación correspondiente, en el que, de manera fundada y motivada, se establezcan las hipótesis normativa aplicable al caso concreto y se analice la prueba de daño que prevé el artículo 129 de la Ley de Transparencia de mérito, para lo cual, los Sujetos Obligados deberán considerar que:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;
* El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y
* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

De tal manera, las limitaciones al acceso a la información deben sustentarse en una adecuada clasificación que debe distinguir y tomar en cuenta qué información puede generar un daño desproporcionado o innecesario a valores jurídicamente protegidos.

Por lo que, podemos advertir que la prueba de daño realizada por **EL SUJETO OBLIGADO**, **cobra relevancia puesto que sí ésta no arroja resultados contundentes sobre un posible peligro, deberá de publicarse y entregarse la información requerida**.

Asimismo, los Sujetos Obligados no pueden emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o información como reservada, ya que dicha clasificación, debe estar acorde con la actualización de los supuestos definidos; resaltándose además que, la clasificación de la información se debe realizar conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la enunciada prueba de daño.

De este modo, es necesario que **EL SUJETO OBLIGADO** al aplicar la prueba de daño, distinga entre los supuestos por los cuales puede invocar la reserva de la información y cuáles de manera clara y específica son los que le atañen a la información que se solicite; situación que le hará permisible distinguir diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información, generando así, una regla individualizada y pertinente para el caso, a través de la aplicación de dicha prueba, con el propósito de obtener, una versión pública o acuerdo conforme a lo solicitado.

Aunado a lo anterior, es importante señalar el contenido del numeral *Octavo* de los *Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas* para realizar la clasificación de la información se debe fundar y motivar señalando el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la Ley o tratado internacional suscrito por el Estado Mexicano que expresamente le otorgue el carácter de reservada, así como especificando las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

Siendo así que, en el caso específico de la reserva, la motivación de la clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva; en otras palabras, para clasificar la información como reservada, se debe contar con el acuerdo respectivo el cual debe estar debidamente fundado y motivado.

Por tanto, la fundamentación y motivación consiste en la obligación que tiene todo ente público de expresar los preceptos jurídicos aplicables al asunto motivo del acto y las razones o argumentos de su actuar.

Al respecto, el máximo tribunal del país ha establecido jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

“**FUNDAMENTACION Y MOTIVACION**. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.”(Sic)

Así, en un acto de autoridad se surte la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.

En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente, por qué, a través de la utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se siente afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Atento a lo anterior, es necesario hacer hincapié que para clasificar la información como reservada, se deben precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, asimismo es claro que los mismos deben aplicar de manera restrictiva y limitada las hipótesis de clasificación y no hacerlas valer de manera general.

En ese orden de ideas, el numeral Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, establece la forma en que se debe fundamentar y motivar la reserva de la información, es decir, a través de los siguientes pasos:

* Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable de las Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o, en el presente caso, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, vinculándola con el Lineamiento específico;
* Se deberá demostrar que la publicidad de la información generaría un riesgo de perjuicio, que rebasa el interés público;
* Se acreditará el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado;
* Se precisará las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, por medio del riesgo real, demostrable e identificable;
* Se deberán señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y
* Se elegirá la opción de excepción al acceso a la información que menos restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público.

En ese contexto, resulta necesario analizar el extracto del Acuerdo de Reserva de la información antes referida, entregado por **EL SUJETO OBLIGADO**, en informe justificado, a fin de establecer si el Comité de Transparencia cumplió cabalmente con las formalidades exigidas por la Ley de la materia y previamente señaladas para la clasificación bajo la modalidad de reserva de la información relacionada con los oficios firmados por el titular de la Consejería Jurídica del 1° al 15 de enero de 2025, en el tenor siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cumplió:** | **Contenido** |
| **Número de folio de la solicitud** | **Sí** |  |
| **Referencia de la información solicitada** | **Sí** |  |
| **Causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada** | **Parcialmente (únicamente señaló la causal del artículo 113, empero no la vinculó con el algún artículo de los lineamientos** |  |
| **Fundamento y Motivación Legal** | **Parcialmente** |  |
| **Conexión entre los fundamentos y motivos que dieron origen a la Reserva de la información** | **No** |  |
| **Prueba de Daño** | | |
| **Riesgo Real, Demostrable e Identificable**  **(Modo, Tiempo y Lugar)** | **Parcialmente** |  |
| **Temporalidad de la Reserva de la información** | **Sí** |  |
| **Autoridades competentes.** | **Sí** |  |

Derivado de lo anterior, se considera necesario traer a colación las fracciones invocadas por **EL SUJETO OBLIGADO** en su acuerdo de clasificación del artículo 140 de la citada ley, las cuales disponen lo siguiente:

“**Artículo 140.** El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes: …

…

VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;

IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;

X. El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;

Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y

Asimismo, es importante destacar que dentro del acuerdo de clasificación **EL SUJETO OBLIGADO** señaló de manera precisa las fracciones V, X, XI, XII del artículo 113 de la Ley General, teniendo que, dichos artículos disponen que podrá considerarse como información reservada, cuando:

**Artículo 113**. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

…

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

…

X. Afecte los derechos del debido proceso;

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Del Acuerdo de Clasificación en análisis, se desprende que los supuesto de clasificación invocados se fundan en las fracciones VI, VIII, IX y X del artículo 140 de la Ley de transparencia Local, así como en las fracciones V, X, XI y XII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia, sin que se observe que se desagreguen y observen el contenido en los numerales Vigésimo tercero, Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo primero de los *Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas* que prevén respectivamente lo siguiente:

“**Vigésimo tercero.** Para clasificar *la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o riesgo que causaría su* difusión.

**Vigésimo noveno.** De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos:

**I.**        La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;

**II.**       Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;

**III.**      Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y

**IV.**      Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.

**Trigésimo.** De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite;

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, y

III. Que su difusión afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.”

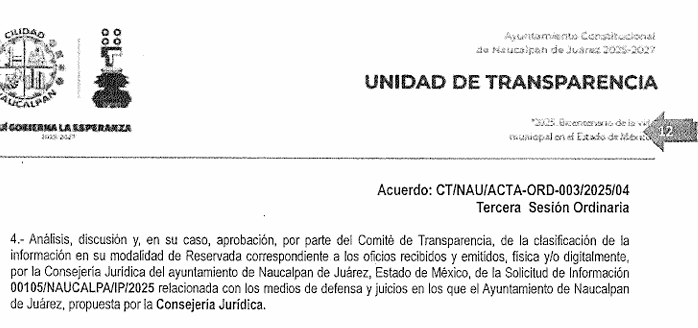
Atento a lo anterior, es posible dilucidar que, en primera instancia la propuesta de clasificación remitida por el servidor público habilitado carece de la debida fundamentación y motivación que de sustento a la reserva de información, además de que no demostró el riesgo real, demostrable e identificable que ocasionaría el de entregar la información peticionada por **LA PARTE RECURRENTE,** así como tampoco acreditó un vínculo, entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, asimismoomitió vincular con el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada dentro de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Bajo este contexto, sirve traer a colación lo que surge del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través de la jurisprudencia con número de registro digital **170307** de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, de febrero de 2008, tesis I.3o.C. J/47 en materia común, en la que establece lo siguiente:

“**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.**

La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo [16 constitucional](javascript:void(0)) establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.

Por otro lado tenemos que, en el desglose de la prueba de daño remitida por **EL SUJETO OBLIGADO** únicamente se contempla el hecho de que los oficios emitidos están relacionados con los medios de defensa y juicios en los que el ente recurrido y sus dependencias son parte, ya que estos no demuestran de que forma el divulgar la información solicitada pueda causar un daño real, demostrable e identificable, en el una de las partes pueda obtener un mayor beneficio en la substanciación del procedimiento respectivo, así como que **EL SUJETO OBLIGADO** remitió de manera parcial el acta en la que se sustenta dicha clasificación, iniciando en la página 12, como se ilustra:



De igual manera, el ente recurrido, clasificó en dicho acuerdo los oficios recibidos por la persona referida en la solicitud de información de trámite; sin embargo dicha información no fue peticionada, como se advierte de la literalidad de la solicitud.

En conclusión en el presente caso **EL SUJETO OBLIGADO** con el acuerdo remitido vía informe justificado para justificar la negativa a la entrega de la información, no reúne los requisitos necesarios para su validez, tomando como base la normativa previamente invocada y referida en el presente estudio.

No obstante, este Órgano Garante comparte la posibilidad de que dentro de los oficios se encuentren documentos que contengan información que sí actualicen alguna de las causales de reserva invocadas y establecidas en el artículo 140 de la Ley de Transparencia Local, lo anterior, tomando en consideración las atribuciones con las que cuenta el Titular de la Consejería Jurídica, que se consagran en el Bando Municipal[[1]](#footnote-1), del **SUJETO OBLIGADO**, siendo las siguientes:

**CAPÍTULO DECIMOPRIMERO**

**DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA**

Artículo 74. La Consejería Jurídica, tendrá a su cargo brindar certeza jurídica, mediante la aplicación de las normas vigentes que regulan la actividad de la Administración Pública Municipal, asegurando el apego a derecho del ejercicio gubernamental, a fin de acrecentar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Siendo, además, la responsable de coordinar a las diferentes unidades jurídicas de las Dependencias, brindando asesoría jurídica a la Presidencia Municipal y a las Unidades Administrativas de la Administración Pública.

De igual forma, es responsable de los actos jurídicos y medios de defensa en los que el Ayuntamiento forme parte, promoviendo los litigios penales, civiles, mercantiles, administrativos, laborales, fiscales, de amparo y los recursos que en estas materias se le encomienden por el Ayuntamiento o, la persona titular de la Presidencia Municipal.

Asimismo, es la encargada de fungir a través de las y los servidores públicos designados como apoderados legales del Municipio, Ayuntamiento, Dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública Centralizada, ante las autoridades judiciales, administrativas, penales, laborales, agrarias, de cualquier otra índole o naturaleza u órganos estatales, así como frente a terceros; sin perjuicio de las atribuciones de representación que corresponda a otras Dependencias y Unidades Administrativas del Municipio, con las atribuciones de un apoderado general para pleitos y cobranzas; y delegar esta representación en uno o más delegados.

Por consiguiente de lo transcrito, se advierte que a dicha Unidad Administrativa es responsable de los actos jurídicos y medios de defensa en los que el Ayuntamiento forme parte, promoviendo los litigios penales, civiles, mercantiles, administrativos, laborales, fiscales, de amparo y los recursos que en estas materias se le encomienden por el Ayuntamiento o, la persona titular de la Presidencia Municipal, así como es la responsable de coordinar a las diferentes unidades jurídicas de las Dependencias, brindando asesoría jurídica a la Presidencia Municipal y a las Unidades Administrativas de la Administración Pública. De igual forma, es la encargada de fungir a través de las y los servidores públicos designados como apoderados legales del Municipio, Ayuntamiento, Dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública Centralizada, ante las autoridades judiciales, administrativas, penales, laborales, agrarias, de cualquier otra índole o naturaleza u órganos estatales, así como frente a terceros.

Por lo que, en el presente caso, este Instituto logra vislumbrar que la información solicitada guarda relación con procedimientos en trámite, pues como ya se refirió, se trata de documentales, las cuales se relacionan con las actividades sustantivas de la unidad administrativa de la que se peticiona los oficios; por lo tanto, se actualiza el primero de los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales.

En el presente caso, al tratarse de procedimientos administrativos de investigación, se puede observar, que **EL SUJETO OBLIGADO** es la autoridad que representa al ente recurrido, y, por lo tanto, se acreditaría el segundo requisito para actualizar la causal de reserva.

Respecto a dicho requisito, en principio resulta necesario puntualizar que, dado la naturaleza de los procedimientos administrativos en análisis, en los cuales el Sujeto Obligado es la autoridad, y existe la otra parte, que es la investigada.

### d) Conclusión

Derivado de lo anterior, podemos advertir que si bien se comparte la clasificación de la información como reservada y a su vez **EL SUJETO OBLIGADO** actuó de manera garante y privilegiando en todo momento el derecho de acceso a la información pública y de igual forma a la protección de los datos personales en su posesión, este Órgano Garante considera que, dicha autoridad debe hacer entrega del acuerdo que emita el Comité de Transparencia, en donde de manera fundada y motivada se apruebe la clasificación de la información respecto de los oficios referidos en el informe justificado.

Finalmente, no se omite comentar que mediante respuesta **EL SUJETO OBLIGADO** adjuntó oficio en los que se advirtió que no fue testada información susceptible de ser clasificada como confidencial, la cual de manera enunciativa más no limitativa es nombre del quejoso en Juicio de Amparo; atento a ello, se deberá hacer del conocimiento al Titular de la Dirección General de Protección de Datos Personales en atención al artículo 82, fracción XXVII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios., a fin de que determinen lo conducente.

Así, con fundamento en lo establecido en los artículos 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y en los artículos 2, fracción II, 9, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 186 y 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

# RESUELVE

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el **SUJETO OBLIGADO** en la solicitud de información **00105/NAUCALPA/IP/2025**, por resultar **FUNDADAS** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por **LA PARTE RECURRENTE** en el Recurso de Revisión **01417/INFOEM/IP/RR/2025,** en términos del considerando **SEGUNDO** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **SUJETO OBLIGADO**, a efecto de que, entregue a través del **SAIMEX**, lo siguiente:

*El Acuerdo de Clasificación como reservada que apruebe el Comité de Transparencia en términos de los ordinales 49, fracción VIII, 129, 140 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de México y Municipios, respecto de los oficios firmados por la persona referida en la solicitud de información del 1° al 15 de enero de 2025 listados por* ***EL SUJETO OBLIGADO*** *en el informe justificado.*

**TERCERO.** **Notifíquese** vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX)** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** Notifíquese a **LA PARTE RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**QUINTO**. Hágase del conocimiento a **LA PARTE RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnar la presente resolución vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables o recurso de inconformidad de acuerdo con lo establecido en los artículo 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**SEXTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **SUJETO OBLIGADO** podrá solicitar una ampliación de plazo de manera fundada y motivada, para el cumplimiento de la presente resolución.

**SÉPTIMO**. Gírese oficio al Titular de la Dirección General de Protección de Datos Personales en atención al artículo 82, fracción XXVII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en términos del Considerando **SEGUNDO** de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EMITIENDO VOTO PARTICULAR, EN LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

SCMM/AGZ/DEMF/PAG

1. [bdo060.pdf](https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/bdo/bdo2025/bdo060.pdf) [↑](#footnote-ref-1)